



BALANCE AMBIENTAL DEL 2011.

La crisis ambiental sigue agravándose a lo largo y ancho del país. Informes internacionales nos califican nuevamente como uno de los países más vulnerables y de mayor riesgo climático del mundo. Mientras tanto no hay ninguna política pública orientada a parar esa crisis y retomar el sendero de la sustentabilidad; el **Estado sigue con la política del avestruz** ignorando irresponsablemente la realidad socio ambiental que padecemos.

Tenemos mayor susceptibilidad y más graves impactos del cambio climático global (p.e.; las cuantiosas pérdidas por el evento 12E) y de la crisis e inseguridad alimentaria. Los severos impactos precarizan la calidad de vida de la población, daños en la economía, la infraestructura social y los ecosistemas. En este año, se han alcanzado mayores niveles de endeudamiento para paliar los daños por desastres.

Este gobierno implementa más de lo mismo. Se insiste en la promoción de falsas soluciones como el Asocio Público privado que es la nueva oleada de privatizaciones; los agrocombustibles, los megaproyectos y represas. **Se aplican las mismas medidas económicas de ARENA que han generado la grave crisis socio ambiental que padecemos.** Hay continuidad y profundización de políticas de libre comercio y del modelo neoliberal.

Se abren nuevas amenazas negociando el ADA con la Unión Europea, el TLC minero con Canadá, el APC con USA que es la prolongación del fracasado ASPAN de Norteamérica.

A nivel global, el fracaso de las negociaciones climáticas reiterado recientemente en la COP 17 en Durban, profundiza y vuelve más grave la crisis climática, energética, alimentaria, sanitaria y de la biodiversidad. Si no se supera drásticamente esa tendencia antes del 2020, **vamos hacia un aumento de la temperatura promedio global de por lo menos 4 °C, que sería en la región y el país de unos 6 °C.**

Al terminar el 2011, **no tenemos ninguna política que procure la gestión sustentable del agua**, ninguna cuenca protegida, ningún río ha sido saneado o descontaminado. Al contrario, la explotación de la mina del Cerro Blanco en Jutiapa, Guatemala, contaminará el Lago Guija y de allí el Río Lempa.

No hay nada serio que garantice la soberanía y seguridad alimentaria. El programa gubernamental de agricultura familiar basado en semillas híbridas y agroquímicos, desestimula y atenta contra prácticas agroecológicas, la sostenibilidad, defensa y cuidado de la semilla nativa. La especulación con los alimentos, los *agrobussines*, la siembra de agrocombustibles junto a la permisividad de cultivos transgénicos empeora la situación.

Tampoco hay cambios en materia de Ordenamiento ambiental del territorio, protección de ecosistemas costero marinos, protección de la cobertura vegetal. Excepto proyectos pilotos de protección a la tortuga marina, no hay nada que proteja o promueva la gestión equitativa de la diversidad biológica. **El territorio y la biodiversidad siguen explotándose irracionalmente.**

No hay políticas públicas que vuelvan más habitables y seguras las ciudades. La crisis del transporte público, la contaminación atmosférica, sónica y visual crece de manera descontrolada y sin medida. La gestión de los desechos sólidos urbanos se ha convertido en un buen negocio para una sola empresa, MIDES, que incluso sabotea el mejoramiento de la gestión en otros lugares del país.

En materia de gestión de riesgos a desastres, lo destacable es que el **MARN ha mejorado en el seguimiento de los eventos hidrometeorológicos** y con ello los sistemas de alerta temprana. Además, el incipiente despliegue del sistema de protección civil ha evitado mayores pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, **los planes y políticas gubernamentales siguen generando vulnerabilidades y riesgos.** La Secretaria de Asuntos de Vulnerabilidad ha sido mal concebida y es prácticamente inútil; no tiene sentido. Lo que se requiere es una instancia gubernamental del más alto nivel para hacer Gestión Estrategia de los Riesgos de desastres, mas allá de lo que debe hacer bien el sistema de protección civil.

Por otro lado, este año la Asamblea Legislativa, si bien reformó la Ley general de educación y la de educación superior para incluir el tema de cambio climático, y amplió la zona de protección frente a la pesca industrial; **no aprobó la Ley General de Agua, ni la Ley de agua potable y saneamiento. No se ha aprobado la Ley que prohíba la minería metálica** en el país. A esta fecha, no **hay Ley que garantice la Soberanía y seguridad alimentaria**, ni que fomente la agricultura sostenible. **Tampoco se ha reformado la Ley de Protección civil** para darle un enfoque preventivo, que permita salir de la actual visión emergencista. La única ley aprobada fue la de Ordenamiento y Desarrollo territorial, la cual había sido diseñada por CASALCO en función de favorecer los negocios de las grandes empresas de construcción, inmobiliarias y financieras.

Pero no solo el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa han actuado de manera irresponsable. La Corte Suprema de Justicia suma otro año sin establecer los Tribunales Ambientales; es decir, que seguimos sin tener donde demandar justicia ante los frecuentes delitos y crímenes ambientales. Los actuales tribunales actúan de manera parcial en favor de los delincuentes ambientales, más, si son grandes empresas, como el caso de Baterías Record. La impunidad de los criminales ambientales es permitida por el actual sistema de justicia.

Después de las incesantes lluvias del fenómeno 12E del mes de octubre, el Presidente Mauricio Funes se comprometió a enfrentar la vulnerabilidad del país. Ojala que el presidente sepa de lo que eso significa. **Demandamos hechos, no promesas.**

San Salvador, 14 de diciembre de 2011.

Red de Ambientalistas en Acción.

Unidad Ecológica Salvadoreña -UNES-